¿Cómo afecta la corrupción a las instituciones?

La corrupción es el uso del poder —conferido por la función pública a una persona o grupo de personas— para perpetrar acciones en favor de intereses particulares. Este uso distorsionado de la función pública puede ser resultado de la influencia de terceros sobre los funcionarios involucrados o derivar de la propia iniciativa de servidores públicos que usan su cargo para beneficiar intereses particulares.

Pues bien, la corrupción atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que se utiliza al Estado —mediante sus poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial— para beneficiar intereses particulares. Por ello, la corrupción es un ataque a la convivencia democrática y a las instituciones que la sustentan.

Si dejamos que la corrupción pase de ser una práctica esporádica y aislada a una práctica endémica, es decir, inherente a un Estado y una sociedad, estaremos dejando que los funcionarios deshonestos conviertan a las instituciones públicas en organismos que actuarán sistemáticamente contra el sentido que la Constitución y la soberanía popular les otorgan. Además, estaremos permitiendo que la sociedad también se corrompa, pues los ciudadanos entenderán que para obtener algo del Estado deben aceptar que es "normal" participar en actos de corrupción. Así, se volverá una práctica socialmente aceptada, sin medir sus consecuencias para la colectividad.

La corrupción atenta contra nuestra confianza en las instituciones del Estado. Cuando, como hemos visto en el Perú, hay autoridades, funcionarios y servidores que atentan contra el interés general —es decir, contra el carácter universal del Estado y contra su rol de garante de los derechos—, los ciudadanos, más tarde o más temprano, dejan de creer que el Estado los representa. Finalmente, podrían recelar de la propia democracia y hasta dudar del sentido que tiene elegir a quienes nos gobiernan.